

No aguardar a ser sol que se pone

Santos Juliá, EL PAÍS, 5 DE FEBRERO DE 1995

En el curso extraordinario de su vida, Felipe González llegó al punto más elevado de la elipse al término de su segunda legislatura. Desde lo alto de aquella posición todo parece brillar en su biografía con el fulgor del éxito. Éxito cuando, muy joven, desplazó a la vieja dirección del exilio que había conducido al partido socialista a la marginalidad y la irrelevancia; éxito al lanzar la arriesgada estrategia de convertir a un partido sobrecargado de ideología en el primer partido socialdemócrata de nuestra historia; éxito en su fulgurante ascenso hacia el poder; éxito, en fin, al culminar el largo trayecto de la incorporación siempre pendiente de España a Europa y levantar algunas de las hipotecas que pesaban sobre la democracia española.

Pero en política no suelen celebrarse grandes festines si no es a costa de montones de desperdicios que es preciso incinerar a medida que se producen. La convicción algo mesiánica de creerse depositario de un proyecto histórico y la aspiración un tanto caudillista a todo el poder para llevarlo a cabo, con la consiguiente exclusión de los discrepantes y la muda subordinación de los fieles, permitió que esos desechos se multiplicaran, seguro como se sentía de haber conquistado una posición inexpugnable en el partido y en el Estado. Nadie pensó, y muchos se indignaban ante la sola sugerencia, en la necesidad de instalar alguna alarma, de disponer de algún mecanismo de limpieza de escombros.

Y así, aquella carrera ascendente entró en un lento declinar que se ha precipitado a estas últimas horas de la tarde, cuando anuncia ya el definitivo ocaso. Es inútil mirar atrás y lamentar las ocasiones más propicias que para marcharse hubo en el pasado: no haber mantenido su intención de que la tercera fuera la última elección a la que se presentaba y haberse empeñado en competir para triunfar en la cuarta. Más le hubiera valido quizá una derrota en la

contienda de junio de 1993 o, ya que la ganó, haber renunciado por la presidencia europea; quizá incluso hubiera sido preferible haber asumido con hechos, no sólo con palabras, la responsabilidad política por los casos Filesa, Roldán y Rubio y haber dimitido en mayo del año pasado. Nada de eso se hizo y ahora todas las líneas Maginot imaginables, y algunas que nadie podía imaginar, han saltado por los aires. Los alemanes se pasean por los bulevares de París y no hay entre ellos ni siquiera un Ernst Jünger que sepa apreciar los tesoros de la ciudad conquistada.

Felipe González y sus más cercanos colaboradores no parecen percibir la profundidad del daño que ha causado al crédito de su partido y de su Gobierno esa devastadora pasión por la propiedad inmobiliaria de la que han sido presa tantos de sus correligionarios. No son conscientes, o no dan muestra de serlo, de que la decepción provocada por los modos de encarar el asunto de los GAL sube tan alta como las expectativas hace 14 años levantadas por su proyecto político. Ahora, cualquier iniciativa que no signifique el corte con tantas escorias del pasado, de las que alguien tiene que reconocerse responsable, nacerá muerta, sin vida, sea la ritual repetición de apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, sea la proclamación enfática de la voluntad de cumplir íntegramente la legislatura. En el punto al que han llegado las cosas, la única perspectiva posible es, como recomendaba Gracián, "no aguardar a ser sol que se pone" y ver si aún queda tiempo para "hacer triunfo del mismo fenecer".

¿Cómo? He ahí la gran cuestión. En todo caso, no estará de más recordar que la marcha de dos líderes tan carismáticos como Brandt y Thatcher, muy dignamente sucedidos, sin necesidad de convocar elecciones, por Schmidt y Major, no arrastró en su estela ninguna catástrofe para los socialdemócratas alemanes ni para los conservadores británicos. Que una salida similar suene entre nosotros puramente especulativa mide bien la naturaleza de nuestra crisis política.

Un presidente interino

Santos Juliá, El País, 02/07/1995

Al final, el presidente del Gobierno ha tenido que ceder a las fortísimas presiones acumuladas sobre su cabeza y se ha visto obligado, contra su voluntad y proclamando la impecable ejecutoria de los interesados, a prescindir de su vicepresidente y del ministro de Defensa. Lo que en el origen de esta última crisis habría podido resolverse con otra energía y otra capacidad de decisión, ha tenido que solventarse en el último momento de mala manera, cediendo ante una fuerza superior y abandonando una trinchera tenida en las primeras escaramuzas por inexpugnable. Como en el caso de su anterior vicepresidente, defendido agónicamente durante un largo año, el sacrificio del más cercano es la confesión de la derrota propia.

Derrota ¿ante quién? No, desde luego, ante el Parlamento. Nos habíamos formado, por lo que se ve, una idea algo ingenua del funcionamiento de la democracia. Cuando el presidente de un gobierno debe echar como carnaza a los tiburones al segundo y al tercero de a bordo, lo que preside es un gobierno en crisis. Y las crisis de un gobierno de minoría, si la democracia tuviera aquella calidad que habíamos dado tontamente por adquirida, se solventan a la luz del día, sabiendo todo el mundo a qué atenerse y cuáles son los términos exactos de su solución. Pero este presidente ha resuelto que más vale una conversación en privado que someterse en público a una cuestión de confianza. No caerá ante las Cortes, no, porque ha decidido evitar gentilmente a las Cortes el ejercicio de ese poder fundamental.

¿Derrota, entonces, ante esos conspiradores que echan un pulso al Estado? Que hay personas con poder social y económico empeñadas en derribar a Felipe González es una evidencia: lo han escrito y publicado; que hay periodistas e intelectuales dispuestos a sufrir persecución, ostracismo y hasta martirio para que todo el mundo se entere de que vivimos en una dictadura camuflada o

bajo un estado de excepción es otra evidencia: lo escriben cada día y hasta recopilan sus artículos para que nadie lo olvide; que eso forme parte de una conspiración es tan absolutamente risible que el presidente no ha podido mencionarlo siquiera en su último y vacío discurso parlamentario.

Ni ante los diputados ni ante los conspiradores; este presidente se basta desde hace dos años a sí mismo para labrarse ante los ciudadanos sus propias derrotas. Pues, en efecto, si un presidente de gobierno argumenta que no ha ordenado, ni conocido, ni utilizado lo que ocurría en la cúpula de su más mimado cuerpo de policía, ni en la del ministerio del Interior, ni en la del espionaje militar, no podrá evitar que el público se pregunte atónito para qué sirve tal presidente. Es increíble que quien ha urdido esta autoexculpación para eludir toda sombra de responsabilidad en la quiebra sucesiva de algunos de los poderes más sensibles del Estado no se percate de que una vez reconocido que no ordenó, ni supo ni utilizó lo que se cocía en las calderas de esos organismos está abriendo una profunda crisis de confianza al admitir ante el público la inutilidad de su presencia al frente del Gobierno.

Es perder el tiempo insistir una vez más en que la única salida institucional a esta crisis consistía en haber reconocido la responsabilidad que le alcanza en todos estos asuntos y haber sometido su continuidad al Parlamento, única institución legitimada para confirmarle o retirarle la confianza. No ha sido así ni lo será. Por eso, el último debate deteriora un grado más la calidad de nuestra democracia no tanto por la gracia chabacana y el tono chulesco exhibidos por los diputados de la oposición, sino porque lo sustancial, la permanencia de un gobierno presidido por González se ha decidido fuera del Parlamento, no se sabe a qué precio ni con qué plazos. Así, entrando en el debate como presidente de un gobierno en crisis, González sale de él como presidente de un gobierno interino. Y un presidente interino es un presidente derrotado.

Después de navidades

Santos Juliá 10/09/1995

Cuando Margaret Thatcher tuvo que pasar por el amargo trago de sondear a sus ministros y medir los apoyos con que contaba para enfrentarse en segunda votación a Michael Heseltine, uno de ellos le dijo que sus posibilidades de triunfo aumentarían si prometía abandonar el cargo después de navidades. “Ofrezca usted una fecha precisa para irse”, le dijo otro de los ministros. Thatcher sabía bien algo que ningún político puede olvidar: que el poder se tiene o no, pero nunca de manera interina. Cuando la presión para abandonar es tan fuerte que hay que señalar una fecha exacta de dimisión en un futuro más o menos próximo, automáticamente se entra en una situación de debilidad que de forma inevitable se agudiza a medida que pasan los días. Thatcher comenta: "Rechacé la sugerencia pero quedé muy agradecida por la diversión". No fue a la segunda vuelta y presentó a la reina su dimisión.

Este Gobierno nuestro de cada día está en crisis desde hace un año y, como no era difícil de prever, cualquier movimiento para ganar tiempo no hace más que agravarla. En política, las crisis suelen obedecer a una desafortunada mezcla de decisiones erróneas tomadas por los actores políticos sobre el telón de fondo de un sistema reglado que actúa como límite y que reduce la libertad de corregir sobre la marcha el rumbo de las cosas cuando se ha torcido. Generalmente, se trata de un cúmulo de errores sobre determinándose unos a otros, pero si hubiera que señalar la decisión que ha bloqueado en este caso la posibilidad de una salida razonable, habría que elegir el momento en que dos de esos actores fijaron una fecha de disolución anticipada de las Cortes Generales. Esta fue una decisión insólita en una democracia parlamentaria, en la que las confianzas se conceden o se retiran, pero siempre en el Congreso y nunca a plazo fijo, de manera que ninguno de los socios pueda convertirse en rehén del otro.

Pero el tipo de acuerdo pactado de forma más bien vergonzante entre González y Pujol no habría provocado tan alto grado de incertidumbre si no disfrutáramos de un sistema que por buscar una estabilidad a ultranza del Gobierno ha introducido tal rigidez en sus relaciones con el Parlamento que una crisis de Gobierno tiende a convertirse en crisis política general. La Constitución dispone, en efecto, que el Gobierno no necesita más que la mayoría simple para permanecer mientras exige la mayoría absoluta, con nombramiento de nuevo presidente incluido, para derrocarlo, con lo que vuelve ociosa la petición de confianza y hace imposible en la práctica la presentación de una moción de censura. Quizá nuestro sistema evita así las crisis de Gobierno propias de un exceso de parlamentarismo, pero al reforzar tanto el poder del presidente, cuando surge una crisis la hace más profunda, prácticamente irresoluble sin disolver el Parlamento, que era exactamente lo que se pretendía evitar.

A ese bloqueo, con su ruidosa fanfarria de jueces y policías, de espías y ladrones, es adonde hemos venido a parar por la decisión errónea de fijar una fecha de disolución a nueve meses vista, tomada al alimón, privadamente, por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Un sistema político cuidadosamente construido para garantizar la estabilidad de los gobiernos está ayudando en la práctica a mantener un Gobierno en situación de crisis permanente. ¿Qué hacer entonces, una catarsis, como algunos proponen? Catarsis ya hemos tenido unas cuantas en nuestra historia, con ríos de sangre incluidos. Antes de comenzar los preparativos de otra, quizá no estaría de más probar con la única iniciativa constitucionalmente correcta que queda a mano para poner fin a la crisis y luego, así que pasen las navidades, iniciar un tranquilo debate sobre los títulos IV y V de la Constitución, pues el híbrido de presidencialismo y parlamentarismo que nos dimos en 1978 no acaba de funcionar.

El valor de la palabra

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS 29/10/1995

Dijo Felipe González un día de verano de 1976 que el partido socialista tenía "serias razones" para declararse marxista. Menos de dos años después, en mayo de 1978, el mismo González reconocía que era "un error para el partido socialista haberse declarado marxista". Pudo haber añadido algún argumento para tan súbito cambio; por ejemplo, que lo que en 1976 era un acierto porque arrebatava votos al PCE en 1978 se convertía en error porque alejaba a los votantes de centro. En política, como saben hasta los aprendices, no hay errores ni aciertos absolutos; todo depende de las circunstancias.

Pero González no ofreció ninguna explicación, sino que al ser confrontado un año más tarde a sus propias palabras afirmó con su habitual aplomo: "Básicamente, yo no he cambiado, y ahí están mis declaraciones para probarlo". Dicha en junio de 1979, en la espera del congreso de la conversión socialista, esta frase podía sonar a sarcasmo. No había tal. González no suele recurrir a la distancia irónica cuando se refiere a sí mismo. Era simplemente un reflejo de la profunda convicción que le ha dominado durante estos años y que consiste en creer que el valor de su palabra no depende de lo que dice, sino de quién la dice: su palabra no vale por lo que diga sino porque la dice él. Por eso, aunque diga hoy una cosa, mañana otra, González, básicamente, no cambia.

Lo único sorprendente en su caso es que no haya aprendido, por respeto a unos oyentes que pueden todavía creer que, si la palabra del hombre no vale nada, es el hombre mismo el que no vale nada, a ser más cauteloso con las palabras enfáticas, absolutas. González atribuye todavía a su discurso efectos políticos inmediatos y concede a veces declaraciones que, por buscar un resultado a corto plazo, le apresan para el futuro. Así ocurrió con el *caso Guerra* y así ha vuelto a suceder en julio de este año cuando, por forzar a Pujol, vinculó su permanencia al frente del

Gobierno a la aprobación de los Presupuestos del Estado aunque sólo fuera, como dijo, por una "minoría mayoritaria", o sea con los exclusivos votos del PSOE, pero sin la oposición de CiU.

Pues bien, como estaba cantado, el presidente se ha quedado sin minoría mayoritaria. El sentido común, el derecho comparado y la opinión sabia y prudente, como todas las tuyas, de Francisco Rubio dicen que, en un sistema parlamentario, la devolución de los Presupuestos equivale a una moción de censura que no deja margen alguno de discrecionalidad al presidente del Gobierno para no presentar al punto su dimisión; no implica necesariamente la disolución del Parlamento, pero sí la inmediata caída del Gobierno y la dimisión de su presidente.

Eso mismo decía González en julio, cuando aseguraba que no se mantendría ni un minuto más en el poder si los Presupuestos eran rechazados por el Congreso. ¿Por qué, entonces, se mantiene? Pues porque, a pesar de lo dicho, él no ha cambiado, sino sólo su palabra, y lo que en julio era un acierto hoy es un error: ya está fijada fecha de disolución, ya está a punto de finalizar la presidencia europea, ya suena en el aire la zambomba y el pandero. Son, desde luego, serias razones para sortear hoy lo que dijo ayer y eludir los compromisos a los que su palabra, si valiera más que su persona, le ataba.

El incordio es que esa cosa tan vulgar, tan antigua, como el respeto a los procedimientos marca en los sistemas democráticos una infranqueable barrera al poder de la palabra del líder. Más aún, si se despoja a la democracia de hojarasca ideológica, lo que queda es el funcionamiento automático de las reglas del juego. Y una regla básica de esta partida en la que todos nos jugamos mucho más de lo que parece es que quien preside un Gobierno contra la mayoría parlamentaria lo que preside es no ya un Gobierno interino o en funciones, sino un Gobierno huérfano de legitimidad. La palabra del presidente podrá no valer nada; las reglas de la democracia lo valen todo.

Por la fuerza de las cosas

Santos Juliá, El País, 17/12/1995

Corría el mes de julio de 1977 y un grupo de dirigentes socialistas se había reunido en Sigüenza para preparar la propuesta constitucional de su partido. Al terminar las jornadas, Felipe González entregó a Alfonso Guerra un sobrecito alargado que contenía un papel muy pequeño en el que le decía: "Te quiero anunciar, y quiero que quede constancia por escrito, que yo no pienso presentarme a la reelección como secretario general del PSOE". Unos años antes, en Suresnes, González había tenido buen cuidado de aclarar que su candidato era Nicolás Redondo y luego, cada vez que ha recordado aquel congreso fundacional, fuente y origen de su poder futuro, ha insistido en que él fue elegido por exclusión, porque no había otro, no porque él lo deseara.

Y así volvió a ocurrir cuando, tras la algarabía de la renuncia al marxismo, el cetro -como escribió Alfonso Guerra en la primera hagiografía de su jefe- quedó abandonado encima de la mesa, sin que nadie se atreviera a recogerlo. No se atrevió Tierno, que coqueteó con la idea y luego se excusó culpando a las fuerzas del capitalismo internacional; tampoco los muy combativos dirigentes de la izquierda socialista, que pretendieron obligar a González a doblar la cerviz en el terreno ideológico, pero no supieron prescindir de él en el terreno práctico. En todo caso, y como había comunicado dos años antes a su amigo, González no se presentó a la reelección en el congreso de 1979: el destino, en forma de clamor general, se encargó de devolverle todo el poder.

Quienes han interpretado al pie de la letra las reiteradas manifestaciones, siempre privadas, del secretario general del PSOE en el sentido de que no volvería a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno en unas futuras elecciones han perdido de vista que Felipe González esgrime,

desde marzo de 1973, el anuncio de su dimisión o de una inminente retirada como arma para reforzar su poder siempre que percibe alguna grieta en sus cimientos. Cuando alguien va dejando caer por ahí, con mucha antelación, venga o no venga a cuento, pero siempre en la intimidad de la confianza personal, nunca en público, que quiere irse, lo que de verdad quiere es medir los apoyos con que cuenta para quedarse. Si uno ha decidido retirarse de verdad, y sabe que todavía no es tiempo de anunciarlo, se lo calla para sus adentros, y cuando el fruto está en sazón, lo pregona a los cuatro vientos, con objeto de que cada cual se sitúe en el terreno sin miedo a que le explote una mina bajo los pies. Felipe González ha hecho todo lo contrario: lo ha repetido en privado, no se ha comprometido en público, ha bloqueado el debate sobre la cuestión, ironiza sobre quienes se habían creído que esta vez iba en serio, les obliga a descubrir su juego y, finalmente, se planta ante los suyos y les dice: si tenéis alguien mejor, me retiro. Lo ha hecho siempre así, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez mañana?

Sobre todo, porque desde siempre la inversión en anuncios de retirada le ha proporcionado el más sabroso dividendo que puede soñar un político de raza: recibir el poder porque así está escrito, porque ése es su destino, de tal manera que nadie le pueda exigir responsabilidades por el uso que de él haga en el futuro. Así lo recibió en Suresnes; así lo recuperó en el congreso extraordinario; así lo reforzará mañana. Ahí radica todo el secreto de su enésimo recurso a la misma táctica: Felipe González ha sufrido desde 1993 un contumaz y persistente asalto a su poder que esta vez ha llegado a afectar al apoyo invariable con que contaba dentro de su partido. La mejor vía para reconstruir la unanimidad consistía en anunciar la retirada, pero hacerlo de tal modo que todos se sintieran empujados por la fuerza de las cosas a confirmarle su incondicional apoyo. Lo ha conseguido: quiere irse, no es candidato pero, si nada se tuerce, volverá a recibir el encargo de encabezar las listas del PSOE en las próximas elecciones.